



Rama Judicial
República de Colombia

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CALERA- CUNDINAMARCA

Referencia: Acción de Tutela
Accionante: DIEGO ALEXANDER GARCIA DÍAZ
Accionado: VANTI S.A. ESP
Vinculados:

- REVISIONES TÉCNICAS EN GAS RGT SAS
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Radicación: 25377408900120230011200
Asunto: Fallo de Tutela
Fecha de Auto: Abril 20 de 2023.

I.TEMA

Decídase la acción de tutela instaurada en nombre propio por **DIEGO ALEXANDER GARCIA DÍAZ**, a fin de que le sean salvaguardados sus derechos fundamentales al **MÍNIMO VITAL** y **PETICIÓN** en contra de **VANTI S.A. ESP**.

II. ANTECEDENTES

Señaló el accionante que el día 27 de marzo de 2023 le fue suspendido sin justificación alguna el servicio de gas en su vivienda familiar, indicó que, conforme a lo sucedido, se comunicó inmediatamente a los abonados telefónicos del servicio al cliente de la empresa VANTI S.A., y la operadora le manifestó que su servicio, sería restablecido el 31 de marzo de 2023. Relató que se le vulneraron sus derechos fundamentales al no haber sido notificado en debida forma del corte del servicio pese a que como usuario ha cumplido cabalmente con sus obligaciones con la empresa de gas.

III. ACTUACIONES SURTIDAS.

Mediante providencia del 10 de abril de 2023, se admitió el asunto y se dispuso accionar el amparo constitucional contra **VANTI S.A.**, y se ordenó la vinculación de oficio de la sociedad **REVISIONES TÉCNICAS EN GAS RGT SAS, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** y

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOLIDARIOS, como terceros con interés legítimo en el asunto de la referencia.

IV. POSICIÓN DE LA ACCIONADA Y ENTIDADES VINCULADAS

Accionada VANTI S.A. ESP

Señaló al despacho que día 27 de marzo de 2023 se realizó la suspensión preventiva del servicio de gas en el inmueble del accionante, puesto que, conforme a la revisión periódica obligatoria, de fecha 21 de enero de 2023 se efectuó en el predio del demandante la visita en la cual se encontró que la instalación del cliente no cumplía con las normas técnicas, sin embargo, aclaró la accionada que el 23 de febrero de 2023 la empresa SERVIHOGAR realizó las adecuaciones, no obstante el usuario nunca informó de dicha situación a la ESP, por lo cual esta quedó facultada para proceder con la suspensión del servicio. Finalmente indicó que el 31 de marzo de 2023 fue restablecido el servicio por lo cual frente al presente caso se demuestra una carencia actual del objeto por hecho superado.

Vinculada RTG S.A.S.

Señaló que la empresa jamás ha recibido una petición del accionante, por lo que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental solicitó al Despacho declarar la improcedencia de la tutela por inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales respecto de esta empresa.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Indicó que revisado el Sistema de Gestión Documental de la entidad no se encontró antecedente relacionados con la situación fáctica descrita por la accionante, señaló que la acción va dirigida a la empresa VANTI S.A. ESP, razón por la cual la superintendencia no tiene legitimación por pasiva en el presente asunto.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Manifestó que en el asunto de la referencia existe una falta de competencia de la entidad frente a los hechos de la acción de tutela, indicó que conforme el Decreto 1369 de 2020 es la SUPERSERVICIOS quien ejerce el control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan servicios públicos.

V. CONSIDERACIONES

a. Competencia

Este Despacho Judicial es competente para conocer en Primera Instancia de la presente Acción de Tutela, dado que conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 “*son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud*” y para el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración a los derechos fundamentales indicados se está generando en esta municipalidad.

b. Legitimación por Activa

Conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé en términos de legitimidad e interés, que la solicitud de amparo constitucional podrá ser promovida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante, para lo cual se presumirán auténticos los poderes.

El ciudadano **DIEGO ALEXANDER GARCIA DÍAZ**, se encuentra habilitado para interponer la presente acción, toda vez que, conforme al Decreto-ley 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos fundamentales.

c. Legitimación por pasiva

En virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 12° del Decreto 2591 de 1991, la accionada se encuentra legitimada como parte pasiva en la presente acción de tutela, en la medida en que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en discusión.

d. Delimitación del caso, problema jurídico y aspectos a tratar.

De acuerdo con los fundamentos fácticos expuestos, corresponde a esta sede judicial determinar si **VANTI S.A. ESP**, presuntamente vulneró el derecho de petición y mínimo vital al suspender el servicio público de gas en el hogar del accionante **DIEGO ALEXANDER GARCIA DÍAZ**.

Así las cosas, ésta instancia deberá determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela es procedente conforme las reglas de la inmediatez y subsidiariedad, y de serlo, entrar a analizar, si la accionada con su presunta conducta, desconoció la garantía fundamental invocada por los accionantes.

EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE PARTICULARES

El Decreto 01 de 1984, que contenía el Código Contencioso Administrativo derogado, no regulaba el ejercicio del derecho de petición ante particulares, sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional dispuso su procedencia, estableciendo un sistema de reglas aplicables en desarrollo de los artículos 2, 20, 23 y 86 de la Constitución Política. Dentro de esta perspectiva la Sentencia SU-166 de 1999 había dispuesto en dicho escenario, que la procedencia del derecho de petición ante particulares estaba regida por los siguientes elementos y reglas:

1. La Constitución de 1991 amplió el alcance del derecho fundamental de petición, pues este se predica respecto de la administración y de las organizaciones privadas, precisando que el ámbito de aplicación en estas últimas era limitado.
2. En el ejercicio del derecho de petición ante particulares, deben diferenciarse dos situaciones: (i) si la organización privada presta un servicio público o si por la función que desempeña adquiere el *status* de autoridad, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública; y (ii) cuando el sujeto pasivo del derecho de petición es una organización que no actúa como autoridad, sólo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado. Por lo mismo, la posibilidad de ejercer el amparo de este derecho contra particulares, depende del ámbito y de las condiciones que señale el Legislador.
3. La extensión del derecho de petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es procedente cuando el derecho de petición sea el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, pues su ejercicio no puede implicar una intromisión en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público.

Posteriormente la Corte Constitucional haría lugar a la procedencia del derecho de petición ante particulares, en aquellos casos en que exista una relación de subordinación o un estado de

indefensión, como desarrollo de lo previsto para el ejercicio de la acción de tutela contra particulares, por el artículo 86 de la Constitución y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

El tema del derecho de petición ante particulares seguiría desarrollándose. Más recientemente y a modo de balance, la Sentencia T-268 de 2013 reiteró la procedencia del derecho de petición ante particulares en seis eventos:

1. Cuando los particulares son prestadores de un servicio público.
2. En los casos en que los particulares ejercen funciones públicas.
3. Cuando los particulares desarrollan actividades que comprometen el interés general.
4. En aquellos casos en los que la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta.
5. Cuando haya estado de indefensión o situación de subordinación frente al particular al que se le eleva la petición.
6. Cuando el legislador autoriza la procedencia de la petición.

La regulación definitiva del derecho de petición ante particulares está contenida en los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015, que recogieron el sistema de reglas construido por la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

“Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. *Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.*

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.

Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se registrarán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.

Parágrafo 1°. *Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.*

Parágrafo 2°. *Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del*

derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.

Parágrafo 3º. *Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.*

Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. *Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores.”*

La Ley 1755 de 2015 es una ley estatutaria y por lo mismo, el proyecto de articulado fue sometido a control previo ante la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-951 de 2014.

El análisis de la Corte recogió la jurisprudencia sobre derecho petición ante particulares ya referida en este fallo, afirmando desde el inciso primero del artículo 32 de la ley, que el ejercicio de ese derecho corresponde a las mismas reglas del derecho de petición ante autoridades públicas, de modo tal, que la petición puede ser presentada de modo verbal, escrito o por cualquier modo idóneo, y que el particular queda sujeto al término para responder peticiones en interés general y particular de quince (15) días hábiles; peticiones de información, diez (10) días hábiles; y peticiones de consulta treinta (30) días hábiles.

Como precisión alrededor de los casos en que se alega la reserva de documentos, la Corte dijo que “fue voluntad del legislador que al derecho de petición ante particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva documental, en la medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se estableció un procedimiento para ello, por cuanto ello hace parte de otras leyes que de manera especial regulan la materia”

La Corte declaró la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 32, que faculta a las entidades privadas a invocar la reserva de información, precisando que “*el artículo 24 relativo a las reservas que se encuentran en el Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de petición ante particulares*” señalado además, que los particulares están habilitados para invocar las reservas contempladas en otras

leyes que regulan la materia de manera especial, como pueden serlo la Ley Estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008 y la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, entre otras normas.

Finalmente la Corporación reiteró la procedencia del derecho de petición ante particulares, en los casos de indefensión y subordinación, en nombre de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales ante particulares, como expresión del derecho a la igualdad, afirmando desde la Sentencia T-689 de 2013, que *“En el plano de las relaciones privadas, la protección de los derechos fundamentales tiene una eficacia horizontal como una manifestación del principio de la igualdad, pues, precisamente ante las relaciones dispares que se sostienen en el ámbito social, sin la obligatoriedad de los derechos fundamentales entre particulares, la parte débil quedaría sometida sin más, a la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene ventaja sobre ella, y desde el punto de vista material, equivale a decir que quienes se encuentran en estado de indefensión o subordinación tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses.”*

DERECHO AL MÍNIMO VITAL.

La H. Corte Constitucional, en sentencia T 211 de 2011, respecto al mínimo vital estableció:

“(…) Así las cosas, esta Corporación ha reiterado en su jurisprudencia que el mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, pues “constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional

e. Inmediatez de la Acción de Tutela

Para activar este mecanismo constitucional deberá existir un tiempo razonable entre los supuestos fácticos que motivan la interposición de la acción de tutela y su presentación, de tal forma que se evidencie la necesidad de una protección urgente por parte del juez constitucional.

En relación con el caso sub examine, encuentra el despacho que el accionante acudió al mecanismo de amparo al día siguiente de la suspensión del servicio, por lo cual para este Despacho se encuentra configurado el requisito de procedibilidad.

f. Subsidiariedad de la acción de tutela

Por medio de la acción de tutela se busca brindar una protección efectiva, actual y expedita de las garantías fundamentales, en consecuencia, para su procedencia, debe verificarse que en el ordenamiento jurídico colombiano no existan otros mecanismos judiciales idóneos para la protección que se pretende, a menos que exista la posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable, evento en el cual, procederá de manera transitoria. Esta sede judicial encuentra configurado el requisito de subsidiariedad y reconoce que la acción de tutela procede en este caso para la protección al derecho fundamental de petición, como mecanismo autónomo y definitivo para proteger los derechos fundamentales invocados, debido a la ausencia de mecanismos ordinarios para solicitar la protección al derecho invocado, respecto al análisis de la presunta vulneración al derecho del mínimo vital su estudio se hará en el siguiente acápite.

g. Estudio del Caso en Concreto.

La acción de Tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo procesal específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos sean violados o se presente amenaza de vulneración.

Descendiendo al caso en concreto tenemos que en efecto el promotor del presente mecanismo acudió a la administración de justicia por vía de tutela con la finalidad de que se le garantice su derecho fundamental de **PETICIÓN y MÍNIMO VITAL**; y se ordene a la accionada dar contestación de fondo a las peticiones presentadas por ellos telefónicamente y las descritas en la demanda de tutela, solicitudes que a juicio de este Despacho Judicial son procedentes habida cuenta que versan sobre la protección de otros derechos de raigambre constitucional.

Al respecto la tesis que sostendrá el despacho respecto a la vulneración al DERECHO DE PETICIÓN, es que se declarara hecho superado el presente asunto, ya que del estudio del acervo probatorio observa el Despacho que la empresa de servicios públicos VANTI S.A. ESP, mediante memorial fechado del **13 DE ABRIL DE 2023**, brindo contestación de fondo a cada una de las solicitudes del accionante. Si bien es cierto, no evidencia este estrado judicial, que la contestación arriada haya sido puesta efectivamente en conocimiento del activante, no es menos cierto que mediante mensaje de datos, este Estrado Judicial envió el memorial aportado por VANTI S.A. ESP, al correo electrónico dispuesto por el accionante para su notificación judicial, esto es, diegogarcia2107@gmail.com, como a continuación se evidencia.



Ahora bien, corresponde a esta funcionaria judicial estudiar la presunta vulneración de derecho al Mínimo Vital del accionante y de su núcleo familiar, sobre el cual es necesario resaltar la configuración de un hecho superado, dado que, conforme a la contestación de VANTI S.A. ESP, se realizó la visita de revisión periódica obligatoria el día 31 de marzo de 2023, en inmueble ubicado en la calle 6 No. 12^a-46 Torre 2- Apartamento 604, de La Calera Cundinamarca, en cual se restableció el servicio público de gas al hogar del accionante, información que fue corroborada vía telefónica por el accionante el 18 de abril de 2023.

Por lo que, para el despacho, respecto del objeto de la presente acción de tutela, se encuentra configurada una carencia actual del objeto por hecho superado.

Al respecto La H. Corte Constitucional, ha puntualizado lo siguiente: (...) *“La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”. Este escenario se presenta cuando entre el*

momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado” (...) Así entonces, corresponde a este despacho declarar que se ha configurado un hecho superado como consecuencia de la desaparición del hecho que amenazaba el derecho fundamental de petición invocado, tal y como lo ha sostenido en reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional.

Es cierto que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el Juez en sentido positivo o negativo, sin embargo, cuando la situación de hecho de la cual la persona se queja, ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en qué consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, puede entenderse que ha desaparecido la vulneración o amenaza, lo que se ha entendido por la doctrina constitucional, como hecho superado. Dicho de otro modo, el objeto esencial de la acción de tutela, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, pues ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el Juez Constitucional, una vez analizado el caso particular, pueda proferir un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al afectado, siempre y cuando exista motivo para ello, pero si la situación fáctica que generó la amenaza ya fue superada, la decisión que pueda emitir el juez de tutela no tendría ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión de la autoridad pública.

Es oportuno resaltarle al ACCIONANTE que la acción de tutela ha sido establecida como un mecanismo de carácter excepcional encaminado a la protección inmediata, directa y eficaz de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones o vulneraciones de que pueden ser objeto, ora por las autoridades públicas, ora por los particulares en los casos previstos por la ley, que no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten, lo anterior a fin de recalcarle que el presente mecanismo no está llamado a solucionar las pretensiones relacionadas con el cobro, certificación, indemnización y notificación (2,3,4,5), pues ante las mismas esta consagradas herramientas previstas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ente encargado del control, la vigilancia e

inspección de las entidades que preste servicios públicos domiciliarios conforme a la ley 142 y 143 de 1994, Ley 689 de 2001, y Decreto 1369 de 2020.

Por último, al no advertir vulneración alguna a los derechos invocados por el accionante por parte de **VANTI S.A. ESP, REVISIONES TÉCNICAS EN GAS RGT SAS, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOLIDARIOS**, se dispondrá su desvinculación del presente trámite.

VI. DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, **RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto del amparo constitucional promovido por **DIEGO ALEXANDER GARCIA DÍAZ**, quien actúa, en nombre propio, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional a **VANTI S.A. ESP, REVISIONES TÉCNICAS EN GAS RGT SAS, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SOLIDARIOS** por no demostrarse vulneración alguna a los derechos incoados por parte de estas entidades.

TERCERO: Si no fuere impugnado el fallo, **REMÍTASE** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes esta determinación a través del correo electrónico del Despacho y a sus respectivas direcciones virtuales. Déjense las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ÁNGELA MARÍA PERDOMO CARVAJAL
Juez

Firmado Por:
Angela Maria Perdomo Carvajal
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Juzgado 001 Promiscuo Municipal
La Calera - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7bbb1a2999124b9c735b14cf124cd0ad936489b8aa8ab3c71ae76ed9ed845809**

Documento generado en 20/04/2023 10:13:45 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>